Recomendación 11/95

Las investigaciones realizadas por esta Comisión de Derechos Humanos dieron como resultado la evidencia de que el Juez 23o. de Paz Penal del Distrito Federal, licenciado Enrique Juárez Saavedra, violó los derechos humanos de la inculpada Aída Karina Gamio Gutiérrez al ordenar que cuando se efectuara su detención fuera internada en el Reclusorio Preventivo Femenil Norte.

El delito por el que se había consignado a Aída Karina Gamio Gutiérrez, daño en propiedad ajena culposo, cuya sanción en ningún caso supera los cinco años de prisión, impedía —de acuerdo con nuestra legislación— que fuera recluida.

Además, se le internó en un reclusorio distinto —el Femenil Oriente— al indicado por el juzgador.

Por lo anterior, la CDHDF recomendó al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, y al Director General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del Distrito Federal, que se iniciaran los procedimientos para determinar la responsabilidad en que incurrieron el Juez 23o. de Paz Penal por la conducta señalada y el personal del Reclusorio Preventivo Femenil Oriente por internar a la detenida sin que existiera documento legal que así lo justificara.

México, D.F., a 30 de agosto de 1995

Magistrado Jorge Rodríguez y Rodríguez
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal

Licenciado Víctor Manuel Ávila Ceniceros
Director General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del Departamento del Distrito Federal

Distinguidos señores:

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 17, fracciones I, II, inciso a, IV y X, 22, fracción IX, y 24, fracciones I y IV, de la Ley de esta Comisión, y 55, 67, 68, 69, 70, 96, 98 y 100 de su Reglamento Interno, ha examinado los elementos contenidos en el expediente CDHDF/121/94/GAM/N2681.000.

I. Motivos de la queja

El 28 de noviembre de 1994, la Comisión Nacional de Derechos Humanos remitió a esta Comisión el escrito de queja de Lourdes Gutiérrez Pedraza, de 8 de noviembre de 1994, en el que expresó que:

El 21 de septiembre de 1994, por orden del Juez 23o. de Paz Penal del Distrito Federal, su hija Aída Karina Gamio Gutiérrez fue aprehendida injustificadamente en relación con la causa penal 213/94, que se seguía por el delito de daño en propiedad ajena. Aída fue conducida a las instalaciones de la Policía Judicial ubicadas en la calle de Escuela Médico Militar, y al día siguiente fue internada en el Reclusorio Preventivo Femenil Oriente. Durante el internamiento su hija no logró establecer comunicación con el Juez. Tres días después le concedieron su libertad bajo caución.

II. Investigación sobre los hechos

1. El 7 de diciembre de 1994, mediante oficio 15625, se solicitó a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia un informe sobre los hechos motivo de la queja y copia certificada del expediente de la causa 213/94 que se tramitaba en el Juzgado 23o. de Paz Penal del Distrito Federal.

2. En la misma fecha, con oficio 15626, se solicitó a la Supervisión General para la Defensa de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal un informe sobre los hechos motivo de la queja y los datos de identificación del agente de la Policía Judicial que aprehendió a Aída Karina Gamio Gutiérrez.

3. El 16 de diciembre de 1994, el licenciado Enrique Juárez Saavedra, Juez 23o. de Paz Penal del Distrito Federal, a través del oficio 1244, remitió a esta Comisión copia del expediente solicitado e informó que dictó la orden de aprehensión contra Aída Karina por *considerarla probable responsable en la comisión del delito de daño en propiedad ajena culposo*. Precisó que libró la orden porque se encontraban reunidos los requisitos que establecen para ello los artículos 16 constitucional y 132 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.

4. El 4 de enero de 1995, mediante oficio SGDH/11326/94, la entonces Supervisión General para la Defensa de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal remitió a este organismo el informe solicitado. Anexó, para ese fin, la copia del informe rendido por el comandante Eduardo Juárez Pulido, Director de Aprehensiones.

También adjuntó el oficio 894, de 21 de septiembre de 1994, rubricado por el agente Jesús Emiliano Pérez Acosta, adscrito a la Guardia de Agentes de la Dirección General de la Policía Judicial, por el que informó al *Director del Reclusorio Preventivo Oriente Sección Femenil* (sic) que remitía a Aída Karina Gamio Gutiérrez, *quien deberá quedar a disposición del C. Juez 23o. de Paz Penal*.

5. El 1 de agosto del año en curso se recibió en esta Comisión el oficio SGDH/5669/95, de 25 de julio de 1995, suscrito por el Supervisor General de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con el que informó a este organismo que, para subsanar las probables anomalías en que hubieran incurrido los servidores públicos de esa dependencia relacionados con el caso, mediante los oficios SGDH/5667/95 y SGDH/5668/95 de 27 de julio del año en curso había solicitado a los licenciados Alfredo Herrera Torres, Director General de Averiguaciones Previas, y Salomón Díaz Alfaro, Contralor Interno, que se iniciara el procedimiento administrativo correspondiente contra:

a) El licenciado Jesús Tovar Romero, agente del Ministerio Público consignador, y, en su caso, los superiores de éste, por haber omitido la aplicación del artículo 272, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, y

b) El agente de la Policía Judicial Jesús Emiliano Pérez Acosta y, en su caso, los superiores de éste, por haber incumplido lo dispuesto en los artículos 16 constitucional y 29, fracción I, del Manual Operativo de la Policía Judicial. Asimismo, solicitó que se iniciara averiguación previa contra el policía judicial para determinar su probable responsabilidad de la comisión de delito contra la administración de justicia.

III. Evidencias

1. El escrito de queja de Lourdes Gutiérrez Pedraza, de 8 de noviembre de 1994, en los términos señalados, en el capítulo I de este documento

2. La copia del informe rendido por el comandante de la Policía Judicial Eduardo Juárez Pulido, Director de Aprehensiones —que se adjuntó al oficio SGDH/11326/94 de 4 de enero de 1995, enviado a esta Comisión—, en el que se señala que Aída Karina Gamio Gutiérrez fue detenida el 21 de septiembre de 1994 *en virtud de la orden de aprehensión girada por el Juez 23o. Penal del D.F.* (sic), *dictada en su contra como presunta responsable del delito de daño en*

propiedad ajena... dicha orden fue cumplimentada por el agente Jesús H. Pérez, placa número 1880... quien detuvo a la quejosa (sic), sin violencia... a las 10:30 horas del día señalado.

3. El oficio 894, de 21 de septiembre de 1994, rubricado por el agente Jesús Emiliano Pérez Acosta, por el que informó al *Director del Reclusorio Preventivo Oriente Sección Femenil (sic), que remitía a Aída Karina Gamio Gutiérrez, quien deberá quedar a disposición del C. Juez 23o. de Paz Penal.*

4. La copia certificada del expediente de la causa penal 213/94, en la que destaca lo siguiente:

a) El 24 de enero de 1994 se inició la averiguación previa 21/122/94-01 contra Aída Karina Gamio Gutiérrez por el delito de daño en propiedad ajena culposo;

b) El 21 de julio de 1994, el licenciado Jesús Tovar Romero, agente del Ministerio Público consignador, solicitó al Juez 23o. de Paz Penal del Distrito Federal, en el pliego de consignación, que dictara orden de aprehensión contra Aída Karina Gamio Gutiérrez como probable responsable del delito de daño en propiedad ajena culposo. El licenciado Tovar Romero no precisó el lugar al que debería ser trasladada la presunta responsable una vez aprehendida;

c) El auto de 18 de agosto de 1994, en el que el Juez 23o. de Paz Penal del Distrito Federal resolvió que era procedente librar la orden de aprehensión contra Aída Karina Gamio Gutiérrez, y ordenó que, una vez detenida,... *la internen en el interior del Reclusorio Norte a disposición de este Juzgado;*

d) El oficio 894 de 2 de septiembre de 1994, por el que el Juez solicitó al Procurador General de Justicia del Distrito Federal que se aprehendiera a Aída Karina Gamio Gutiérrez, sin señalar el lugar al que debería ser trasladada, y

e) El oficio de 22 de septiembre de 1994, por el que la licenciada Elsa I. Rivera Martínez-Cairo, Subdirectora Jurídica del Reclusorio Preventivo Femenil Oriente, comunicó al Juez 23o. de Paz Penal del Distrito Federal que Aída Karina Gamio Gutiérrez había ingresado al reclusorio ese mismo día a las 11:40 horas. El oficio fue recibido en el Juzgado al día siguiente (23) a las 9:10 horas.

5. El informe contenido en el oficio 1244, de 16 de diciembre de 1994, dirigido a esta Comisión por el Juez 23o. de Paz Penal del Distrito Federal, licenciado Enrique Juárez Saavedra, en el que, entre otros señalamientos, expresa que:

a) Ordenó la aprehensión de la quejosa porque, al hacer el estudio correspondiente, encontró los *elementos indiciarios necesarios* que acreditaban la probable responsabilidad penal de la inculpada, y

b) Desconoce cuándo fue aprehendida la inculpada y *a dónde fue llevada, siendo que la Policía Judicial la puso a disposición de este Juzgado en el Reclusorio Preventivo Oriente, nosocomio (sic) distinto al señalado por el suscrito.*

6. El oficio SGDH/5669/95, recibido en esta Comisión el 1 de agosto del año en curso, suscrito por el Supervisor General de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con el que nos informó que ya se habían dado instrucciones para que se iniciaran:

a) Procedimiento administrativo de responsabilidad contra:

a1) El licenciado Jesús Tovar Romero, agente del Ministerio Público consignador y, en su caso, los superiores de éste, por haber omitido en el caso motivo de la queja la aplicación del artículo 272, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, y

a2) El agente de la Policía Judicial Jesús Emiliano Pérez Acosta y, en su caso, los superiores de éste, por haber incumplido lo dispuesto en los artículos 16 constitucional y 29, fracción I, del Manual Operativo de la Policía Judicial. y

b) Averiguación previa contra el mismo agente de la Policía Judicial para determinar su probable responsabilidad en la comisión de delito contra la administración de justicia.

IV. Situación jurídica

El 1 de diciembre de 1994, el Juez 23o. de Paz Penal, por perdón del ofendido, declaró extinguida la acción penal ejercitada contra Aída Karina Gamio Gutiérrez y decretó su absoluta libertad.

V. Observaciones

1. El Juez 23o. de Paz Penal del Distrito Federal, licenciado Enrique Juárez Saavedra, violó los derechos humanos de la inculpada Aída Karina Gamio Gutiérrez al ordenar su aprehensión y señalar expresamente en el auto correspondiente que debía ser internada *en el interior del Reclusorio Norte* (evidencia 4c).

El delito por el que se había consignado a Aída Karina Gamio Gutiérrez, daño en propiedad ajena culposo, cuya sanción en ningún caso supera los cinco años de prisión, impedía que fuera internada en el reclusorio, ya que el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en su artículo 272, párrafo segundo, dispone:

"Tratándose de delitos por imprudencia, cuya pena de prisión no exceda de cinco años, el acusado será puesto a disposición del Juez directamente sin quedar internado en los lugares de prisión preventiva para que pueda solicitar su libertad provisional."

Tal conducta del Juez es probablemente constitutiva de falta oficial, prevista en el artículo 47, fracciones I y XXII, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que establece:

"Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan sin perjuicio de sus derechos laborales ...:

"I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión, y

"XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público;"

2. Personal del Reclusorio Preventivo Femenil Oriente también incurrió en responsabilidad al haber internado a la detenida a pesar de que no existía documento legal que lo ordenara precisamente en ese centro penitenciario, infringiendo con tal acto lo dispuesto por los artículos 13 y 43 del Reglamento de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del Distrito Federal, que señalan:

"Artículo 13. La internación de alguna persona en cualesquiera de los reclusorios del Distrito Federal se hará únicamente:

"II. Por resolución judicial;

"Artículo 43. Los directores de los reclusorios preventivos cuidarán bajo su más estricta responsabilidad, que por ningún motivo sea internada en los mencionados reclusorios, persona alguna sin la correspondiente documentación expedida por la autoridad competente. en la que conste la consignación o la causa de la internación en el caso de los supuestos a que se refiere el artículo 13 del presente reglamento.

"Cuando sea remitida alguna persona sin tales documentos, el funcionario o en su caso el encargado del establecimiento, en ese momento tomará los datos de aquélla e informará de inmediato a la autoridad superior la negativa de recibir a dicha persona."

No sólo se permitió la indebida internación de Aída Karina Gamio Gutiérrez el jueves 22 de septiembre de 1994, día hábil, a las 11:40 horas, sino que hasta el día siguiente a las 9:10, veintiuna horas y treinta minutos después, se notificó al Juez que la detenida se encontraba a su disposición. No hubo motivo legal para permitir su internamiento ni para demorar por tanto tiempo la notificación al Juez. Incluso esta última pudo haberse hecho inmediatamente por vía telefónica.

Con tales actos, personal del Reclusorio Preventivo Femenil Oriente incurrió en conductas probablemente constitutivas de la falta oficial prevista en la fracción I del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

3. También servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal incurrieron en responsabilidad debido a que, a pesar de que el 21 de septiembre a las 10:30 horas fue capturada la inculpada, no fue sino hasta el día siguiente a las 11:40 horas, veinticinco horas diez minutos después, cuando entregaron a la detenida en el Reclusorio Preventivo Femenil Oriente.

Con tal conducta se infringieron los artículos 16 constitucional, párrafo tercero; 225, fracción XX, del Código Penal para el Distrito Federal, y 29, fracción I del Manual Operativo de la Policía Judicial del Distrito Federal, que establecen:

"Artículo 16 (párrafo tercero). La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculcado a disposición del Juez que la libró, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la Ley Penal.

"Artículo 225. Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos...

"XX...realizar la aprehensión sin poner al detenido en el término señalado por el párrafo tercero del artículo 16 de la Constitución.

"Artículo 29. Los miembros de la Policía Judicial... deberán:

"I. Respetar los principios de legalidad y constitucionalidad de los individuos en el desarrollo de las actividades que realicen en el ejercicio de sus funciones."

Por haber incumplido tales disposiciones, se inició contra servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal procedimiento administrativo y averiguación previa, a fin de determinar la responsabilidad en que incurrieron.

4. La serie de conductas irregulares de los servidores públicos tuvieron como consecuencia que Aída Karina Gamio Gutiérrez tardara cuarenta y seis horas veinte minutos en quedar a disposición de su Juez, cuando, si se hubiese cumplido la ley, sólo debió haber tardado el tiempo necesario para ser trasladada del lugar donde fue capturada, Miguel Bernard, colonia La Escalera, delegación Gustavo A. Madero, a la sede del Juzgado 23o. de Paz Penal, es decir, una o dos horas.

Por lo expuesto y fundado, esta Comisión de Derechos Humanos, respetuosamente, se permite formular a ustedes, señores, las siguientes:

VI. Recomendaciones

A) Al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal

A) Al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal

Primera. Que, en los términos de los artículos 277 y 278 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, se lleve a cabo el procedimiento para determinar la posible responsabilidad en que presuntamente incurrió el licenciado Enrique Juárez Saavedra, Juez 23o. de Paz Penal del Distrito Federal, por haber omitido la aplicación del artículo 272, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, incurriendo así en las hipótesis establecidas en las fracciones I y XXII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

B) Al Director General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del Departamento del Distrito Federal

B) Al Director General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del Departamento del Distrito Federal

Segunda. Instruir a la Contraloría Interna de esa Dirección General para que se lleve a cabo el procedimiento administrativo que determine la responsabilidad en que haya incurrido el personal del Reclusorio Preventivo Femenil Oriente por internar a la detenida sin que existiera documento legal que así lo justificara, y por no haber notificado inmediatamente al Juez que se encontraba a su disposición, infringiendo con tales actos lo dispuesto por los artículos 13 y 43 del Reglamento de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del Distrito Federal e incurriendo así en la hipótesis establecida en la fracción I del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Con fundamento en los artículos 48 de la Ley y 103 del Reglamento Interno de esta Comisión, les ruego que si esta Recomendación es aceptada, la respuesta nos sea informada dentro de los 15 días hábiles siguientes a su notificación, y que las pruebas de su cumplimiento se nos envíen dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo anterior.

**El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
Luis de la Barreda Solórzano**